



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-013-2022-00123-01
Demandante: Heriberto de Jesús Cuartas Muriel
Demandados: UGPP
Asunto: Apelación y consulta de sentencia
Procedencia: Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Pensión jubilación convencional, causación y disfrute,
Acto Legislativo 01 de 2005- mesada 14.

Medellín, agosto cuatro (04) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las partes, e impartir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad demandada, respecto de la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Heriberto de Jesús Cuartas Muriel contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP. Radicado Único Nacional 05001-31-05-013-2022-00123-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Heriberto de Jesús Cuartas convocó a juicio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, pretendiendo se declare que tiene derecho a percibir, a partir del 18 de septiembre de 2015, la pensión de jubilación convencional consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva suscrita entre el ISS y la organización sindical Sintraseguridad Social, consecuentemente, se condene a la UGPP a reconocer la prestación, con el retroactivo pensional, debidamente indexado.

En respaldo de tales pedimentos se expuso que el señor Heriberto de Jesús Cuartas Muriel nació el 18 de septiembre de 1960, que laboró al servicio del Instituto de Seguros Sociales, en condición de trabajador oficial, entre el 20 de agosto de 1980 y el 25 de junio de 2003, desempeñando el cargo de ayudante, que en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1750 de 2003, pasó a laborar sin solución de continuidad en la ESE Rafael Uribe, conservando la condición de trabajador oficial, laborando allí entre el 26 de junio de 2003 y el 18 de julio de 2008.

Se indicó que el 31 de octubre de 2001 Sintraseguridad Social, sindicato mayoritario, suscribió convención colectiva de trabajo con el Instituto de Seguros Sociales, consagrándose en el artículo 98 el derecho a una pensión de jubilación para el trabajador oficial que cumpliera 20 años de servicio continuo o discontinuo en el ISS y 55 años en el caso de los hombres, convención colectiva de la que el demandante fue beneficiario, satisfaciendo los requisitos para el reconocimiento de la prestación referenciada, la cual solicitó a la UGPP el 22 de julio de 2021.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada judicial legalmente constituida, la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP** aceptó la fecha de nacimiento del actor y la reclamación administrativa presentada por el mismo, aclarando que la entidad dio respuesta a dicha petición el 21 de octubre de 2021, indicó que no es cierto que el demandante cumpla los requisitos del artículo 98 de la Convención Colectiva 2001-2004, misma que puede ser aplicada a los trabajadores oficiales vinculados al ISS hoy liquidado y de ninguna manera a empleados públicos adscritos a entidades diferentes, así como a quienes cumplieran los requisitos de edad y tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010, señalando respecto de los demás hechos, que se atiene a los documentos aportados.

En oposición a la prosperidad de las pretensiones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación; compensación y pago; prescripción; imposibilidad de condena en costas y compartibilidad pensional.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 13 de julio de 2023, declaró que al señor Heriberto de Jesús Cuartas Muriel le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, conforme el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 suscrita entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y SINTRASEGURIDADSOCIAL; condenó a la UGPP a pagar al demandante la suma de \$80.718.096, a título de retroactivo pensional de jubilación liquidado desde el 22 de julio de 2018 hasta el 17 de septiembre de 2022 inclusive. Igualmente, condenó a la entidad a cancelar la suma de \$1.042.295, a título de retroactivo de mayor valor liquidado desde el 18 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, disponiendo que a partir del 1 de julio de 2023 la UGPP pagará al demandante un mayor valor mensual de \$115.285, sin perjuicio de los incrementos de ley, y del mayor valor sobre la mesada adicional de diciembre; condenó a la accionada al pago de la indexación;

declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de los derechos causados y exigibles con anterioridad al 22 de julio de 2018 y condenó en costas a la demandada.

1.5.- RECURSO DE APELACIÓN

El procurador judicial de **Heriberto de Jesús Cuartas Muriel** interpuso el recurso de alzada en cuanto a la negativa al reconocimiento de mesada 14, sosteniendo que lo relevante para el reconocimiento del derecho a percibir la mesada 14, no es la fecha de exigibilidad de la pensión, si no la de la causación de la misma, la cual en este caso se concreta con el cumplimiento del tiempo de servicio exigido, conforme al parágrafo transitorio 6 del artículo 1 del Acto legislativo, y en ese sentido, tal y como se reconoció en la sentencia, para efectos de otorgar el derecho a la pensión de jubilación, se causa con el cumplimiento del tiempo de servicio, mientras que la edad es presupuesto para la exigibilidad del derecho, estimando que el demandante causó la pensión de jubilación mucho antes del año 2011, cuando cumplió los 20 años de servicio al ISS, considerando que existe una contradicción lógica en la jurisprudencia de la Corte en el sentido que para reconocer la pensión se tenga en cuenta la fecha del cumplimiento del tiempo de servicio y para la mesada 14 el cumplimiento de la edad.

Por su parte, la vocera judicial de la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP**, apela la providencia sosteniendo que al verificar en el expediente la copia de la cédula de ciudadanía y los certificados de información laboral, se valida que al 31 de julio de 2010, el demandante tenía 52 años de edad, no alcanzando a cumplir el estatus de pensionado en los plazos establecidos en la convención colectiva en sus artículos 98 y 101 y el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que no es procedente reconocer la pensión de jubilación, pues la ley no permite efectuar reconocimientos después de la entrada en vigencia del mencionado acto legislativo, trayendo a colación la sentencia del 4 de noviembre de 2015, donde la Sala de Casación Laboral, en un caso similar indicó que no era

posible aplicar los beneficios de la convención colectiva como lo es la prestación establecida en el artículo 98.

Sostuvo que en este caso se tomó la edad como requisito de exigibilidad y no de causación, posición que contraviene el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 y el alcance que le otorgó la Corte Constitucional en sentencia SU 555 de 2014, en donde se señala que para pensiones convencionales la edad no es un mero requisito de exigibilidad, sino un requisito de causación, por lo tanto, conforme al artículo 98 de la Convención colectiva es requisito que el trabajador oficial cumpla la edad en vigencia de la convención colectiva, misma que no logró cumplir el demandante, no siendo procedente reconocer la pensión de jubilación convencional, por lo que solicita se revoque en su totalidad la sentencia.

Por último, peticiona que, en el eventual caso de que se considere confirmar la sentencia, se tenga en cuenta que la entidad ha venido actuando conforme a las normas legales, dando respuesta a los requerimientos presentados por el demandante en forma oportuna y que la negativa en el reconocimiento de la prestación obedece a lineamientos normativos y jurisprudenciales cifrados a lo largo del proceso, solicitando se revoquen las costas procesales.

1.6.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, el apoderado de la parte demandante solicita se confirme la sentencia en cuanto reconoció el derecho del demandante a percibir la pensión de jubilación convencional consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva de trabajo, con fundamento en la interpretación jurisprudencial del Acto Legislativo 01 de 2005, contenido en sentencias como la SL2543 de 2020, SL5006 de 2020, SL661 de 2021, SL4622 de 2021, SL5490 de 2021, SL399 de 2022, SL1311 de 2022, SL042 de 2023, SL351 de 2023 y SL1392 de 2023, entre muchas otras, asimismo, se revoque en cuanto negó el reconocimiento de la mesada catorce, reiterando

para ello los argumentos planteados en la sustentación del recurso de alzada y consecuentemente, se modifique el monto del retroactivo pensional.

Por su parte, la procuradora judicial de la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP**, insistió en los argumentos esbozados en la sustentación del recurso de alzada, a fin de que se revoque la sentencia íntegramente, toda vez que en estos casos la edad no es un mero requisito de exigibilidad sino un verdadero requisito de causación, al igual que el tiempo de servicio y en atención a ello, es claro que el demandante no cumplió con el requisito de la edad exigido en la convención colectiva de trabajo, ya que al 31 de julio de 2010 tenía 52 años de edad, en consecuencia, de conformidad con lo consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2005, no es procedente reconocer la pensión de jubilación convencional.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

De igual forma, procede la consulta en favor de **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP**, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que el señor Heriberto de Jesús Cuartas Muriel nació el 18 de septiembre de 1960, tal y como se desprende de la copia del registro civil de nacimiento visible a folio 16 del anexo 02 del expediente digital.
- Que el pretensor laboró al servicio del Instituto de los Seguros Sociales desde el 20 de agosto de 1980 y hasta el 25 de junio de 2003, y, al servicio de la ESE Rafael Uribe Uribe, desde el 26 de junio de 2003 hasta el 18 de julio de 2008, desempeñándose como celador, según se acredita con la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL, obrante a folios 31 a 40 del anexo 02 del expediente digital.
- Que el señor Cuartas Muriel es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 celebrada entre el sindicato Sintraseguridad Social y el Instituto de Seguros Sociales.
- Que el accionante solicitó a la U.G.P.P, el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, el 22 de julio de 2021, prestación que le fue negada mediante resolución RDP 029191 del 29 de octubre de 2021, tal y como se evidencia del documento glosado a folios 31 a 34 del anexo 04 del expediente digital.
- Que Colpensiones mediante la Resolución SUB 267075 del 27 de septiembre de 2022, reconoció la pensión de vejez al demandante a partir del 18 de septiembre de 2022, con una mesada pensional en cuantía de \$1.473.696, véase folios 97 a 106 del anexo 20 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si al señor Heriberto de Jesús Cuartas Muriel le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva 2001-2004 suscrita por el ISS y el sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL, verificando para tal fin, si el requisito de la edad, esto es, 55 años corresponde a una condición para la causación del derecho o para la exigibilidad o disfrute del mismo, determinando además, la vigencia de la norma convencional de cara a la expedición del acto legislativo 01 de 2005?

¿Si es procedente modificar la decisión de primera instancia, con el fin de ordenar el reconocimiento de la mesada 14?

¿Si hay lugar a revocar la condena en costas impuesta a cargo de la UGPP?

2.4.- TESIS DE LA SALA

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, i) al actor le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional, siendo la edad un requisito de exigibilidad de la prestación, no viéndose afectado su derecho por el Acto Legislativo 01 de 2005, ii) prestación que debe reconocerse por 14 mesadas, iii) siendo procedente la condena en costas impuestas a la entidad llamada a juicio, consecuentemente, la sentencia de primera instancia será modificada y confirmada.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

La Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, suscrita entre el extinto Instituto de los Seguros Sociales y el sindicato SINTRASEGURIDADSOCIAL, consagró en el artículo 98, la pensión de jubilación en los siguientes términos:

“El trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100%

del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:

(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicios.

(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.

(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio”

Alcance del acto legislativo 01 de 2005 respecto a la vigencia de las reglas pensionales con posterioridad al 31 de julio de 2005

Con la reforma introducida al artículo 48 de la Carta Política, por el párrafo 3° del acto Legislativo 01 de 2005, se restringe el ámbito de la negociación colectiva en materia pensional. Dispone la norma:

“Párrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”.

La reforma constitucional comporta la pérdida de vigencia las normas convencionales que fijan reglas pensionales diferentes a las consignadas en el Sistema General de Pensiones, dejando a salvo los derechos adquiridos mientras esas reglas pensionales tuvieron vigencia, así lo ha entendido la Sala Laboral de la Corte suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias CSJ SL, Radicado 29907

de 2008, CSJ SL Radicado 34044 de 2009, SL, Radicado del 24 de abril 2012, CSJ SL13267-2016, SL12498-2017 (49768) de 2017 y SL-14282 (63413) de 2018.

Ahora, en cuanto al alcance de dicha disposición, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL12498-2017, SL703-2018 y SL1428-2018, venía sosteniendo que la expresión se “mantendrán por el término inicialmente pactado” alude al término inicial de duración estipulado expresamente en la convención, y la expresión “ en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”, hace referencia a las prórrogas automáticas de las convenciones colectivas, que venían operando con anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, las cuales subsisten hasta el 31 de julio de 2010.

No obstante, el anterior criterio fue rectificado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante las sentencias SL 3343 del 26 de agosto de 2020, radicación 78303 y la sentencia SL3635 del 16 de septiembre de 2020, radicación 74271.

En la citada sentencia SL3343 de 2020, al interpretar el artículo 98 de la convención 2001-2004, sostuvo la Corte:

*“Así las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala ha comprendido en forma disímil el contenido del citado artículo 98 convencional, se precisa que, a partir de esta decisión, **la interpretación válida de dicha cláusula es la que aquí se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación**”.* (negrilla de la Sala)

Y en la sentencia SL 3635 de 2020, respecto del alcance del párrafo transitorio 3º del acto legislativo 01 de 2005, indicó:

“De la norma constitucional así consagrada, se deducen dos postulados diferentes: uno, para las disposiciones colectivas que desde antes de su expedición venían rigiendo, cuya vigencia se mantendrán hasta el término inicialmente pactado, que a su vez incluye las

prórrogas automáticas que se venían surtiendo y, otro, para aquellas convenciones que se establecieran entre su fecha de expedición y el 31 de julio de 2010, que no podrán ser más favorables a las que para entonces estuvieran vigentes”.

Y más adelante, refirió:

“Bajo ese contexto, tal como se determinó en la sentencia CSJ SL2543-2020, en principio, no es posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio de 2010. Sin embargo, asevera la Sala que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cubra un periodo superior a esa data, debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previó de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva de trabajo que firmaron, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010.

Conforme a lo anterior, concluyó el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, que para la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la cláusula 98 de la convención colectiva de trabajo venía rigiendo, en virtud de las prórrogas automáticas, y que en la misma se había pactado como plazo inicial una vigencia hasta el año 2017, línea de pensamiento que ha sido reiterada entre otras en la sentencia SL4163 de 2021 y más reciente en las sentencias SL042 de 2023 y SL 1490 de 2023.

Lo anterior, se acompasa con el análisis contenido en la sentencia SU 555 de 2014, proferida por la Corte Constitucional en la se estudia si el acto legislativo 01 de 2005, es contrario a las recomendaciones impartidas por la OIT a Colombia, concluyendo que las misma son compatibles con la reforma constitucional y no han sido incumplidas por el Estado Colombiano:

“Además, como se indicó en precedencia, también con el parágrafo transitorio tercero se respeta incluso la expectativa legítima de aquellos trabajadores que, si bien no cumplían requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí se encontraban cobijados por pactos o convenciones colectivas celebradas antes del 29 de julio de 2005 y con fecha de

vencimiento posterior al año 2005 o, incluso, al 31 de julio de 2010 fecha límite fijada por el constituyente. Éstos tenían una legítima expectativa de ser pensionados de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva que firmaron mientras continuara vigente, y así lo reconoce la norma constitucional al establecer que seguirán rigiendo hasta el término de su vencimiento.

Esto es justamente lo que está recomendando el Comité Sindical de la OIT, que las pensiones convencionales que contengan reglas de carácter pensional mantengan sus efectos hasta la fecha de su vencimiento. En últimas, que se respeten los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, que es lo mismo que garantiza el Acto Legislativo 01 de 2005 tanto en el Parágrafo transitorio segundo como en el tercero, en los que establece una regla para derechos adquiridos y también una regla de transición para garantizar que se satisfagan las expectativas legítimas de pensión.

Y todo lo anterior, garantiza también la protección de la negociación colectiva en cuanto no ignora lo hasta ese momento negociado y decidido en un contexto de libertad sindical.

2.6. CASO CONCRETO.

Como se indicó en líneas anteriores, se acreditó que el señor Heriberto de Jesús Cuartas Muriel nació el 18 de septiembre de 1960, razón por la cual arribó a los 55 años de edad el 18 de septiembre del año 2015, encontrándose igualmente probado, que el actor prestó sus servicios en favor del extinto Instituto de los Seguros Sociales desde el 20 de agosto de 1980 y hasta el 25 de junio de 2003, asimismo, que laboró al servicio de la ESE Rafael Uribe Uribe, desde el 26 de junio de 2003 hasta el 18 de julio de 2008, periodos en los cuales se desempeñó como celador y que equivalen a 27 años, 10 meses y 5 días, tiempo más que suficiente para consolidar su derecho a la pensión de jubilación en los términos del artículo 98 de la Convención Colectiva de trabajo.

Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial vigente, es claro, que al accionante le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prestación deprecada, tal y como lo concluyó la falladora de primera instancia, en tanto que el término inicial pactado por las partes en la Convención Colectiva 2001-2004, corresponde al año 2017, razón por la cual no es posible atender los argumentos expuestos por la apoderada de la UGPP en la sustentación del recurso de alzada, aliviando igualmente, que el cumplimiento de la edad,

constituye un presupuesto para el disfrute de la prestación y no para su causación, que para el caso concreto deriva del cumplimiento de veinte años de servicios, presupuesto que se satisfizo el pretensor para el 20 de agosto del año 2000.

Ahora, en lo que respecta al monto de la prestación, se tiene que el mismo artículo 98 convencional establece que para quienes se jubilen entre el 1° de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2016, premisa aplicable al actor, la pensión corresponde al 100% del promedio mensual de lo percibido en los últimos tres años de servicio, efecto para el cual se tiene en cuenta la asignación básica mensual, prima de servicios y vacaciones, auxilio de alimentación y transporte, valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras, valor de trabajo en días dominicales y feriados, encontrando que la liquidación efectuada por el juzgado, contenida en el anexo 39 del expediente digital, contrastada con la historia laboral del accionante glosada en el anexo 17 del expediente digital, se encuentra ajustada a derecho, correspondiendo al accionante una mesada para el año 2015 equivalente a \$934.166, mesada que indexada al año 2015, arroja un valor final de \$1.168.586.

Causación de la mesada Catorce

Pasando a resolver el reparo efectuado por el apoderado de la parte actora, advierte la Sala que le asiste razón al recurrente, pues, a juicio de la Sala, al señor Cuartas Muriel le asiste derecho al reconocimiento de la mesada 14. Relieva esta Colegiatura, que si bien es cierto, a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 fue derogada la mesada adicional de junio, con excepción a quienes perciban una pensión igual o inferior a tres (3) SMLMV y cuya prestación se haya causado antes del 31 de julio de 2011, en el asunto sometido a consideración de la Sala, el accionante causó el derecho a la pensión convencional de jubilación al momento de cumplir los 20 años de servicio, momento que como se dejó anotado anteriormente, tuvo lugar el 20 de agosto del año 2000, adicionalmente, el pretensor prestó sus servicios hasta el mes de julio de 2008, iterando, que en

eventos como el presente, la edad, es un requisito de exigibilidad y no de causación del derecho.

Sobre este punto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un asunto análogo al presente, en sentencia SL5116 de 2020, concluyó:

“Ahora, en cuanto al número de mesadas, la prestación deberá reconocerse en catorce pagos anuales, toda vez que si bien con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, fue suprimida la mesada adicional de junio para quienes se pensionaran a partir de su entrada en vigencia (29 de julio de 2005), ello no cobijó a quienes percibieran una mesada igual o inferior a tres veces el salario mínimo legal, y cuyo derecho se causara antes del 31 de julio de 2011, es decir, después de esta fecha la mesada adicional analizada dejó de existir. En el caso del impugnante, se tiene que la primera mesada que se reconoce a partir del 1.º de enero de 2015, en cuantía de \$1.341.252,69, no supera los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes pues para esa anualidad dicho valor correspondía a \$644.350 y, como ya se explicó, la pensión se causó el 21 de agosto de 2008”. (subrayas de la Sala)

Y en igual sentido, el órgano de cierre de la jurisdicción, en sentencia SL1272 de 2023, remembrando la sentencia SL4075 de 2020, recordó:

“Restricción que no se aplicaba al caso bajo examen, por cuanto el señor Botero Cortés causó el derecho a la pensión restringida de jubilación en la fecha en que cumplió el últimos de los dos requisitos exigidos por la ley, es decir, el 15 de noviembre de 1991, cuando se retiró voluntariamente del servicio, ya que el cumplimiento de la edad, en tratándose de la pensión reconocida, se considera como un mero requisito de exigibilidad para su disfrute, no de causación, tal como lo ha adoctrinado esta Sala, entre otras, en sentencias CSJ SL del 11 mayo 2010, rad. 34070, CSJ SL5704-2015 del 6 de mayo de 2015, rad. 55774, CSJ SL9361-2015 del 8 de julio de 2015, rad. 57218 y CSJ SL7699-2016, por supuesto, no como equivocadamente lo entendió la UGPP al señalar que al actor no le asistía derecho a esta mesada pensional, pues a su juicio no gozaba de respaldo jurídico.”

En cuanto a la excepción de prescripción, se afectan las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 22 de julio de 2018, tal y como lo determinó la a quo, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se presentó el 22 de julio de 2021.

Conforme a lo expuesto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP deberá reconocer y pagar al demandante, la suma de \$85.111.245, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 22 de julio de 2018 y el 17 de septiembre de 2022, conforme a la siguiente liquidación:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2015	6,77%		\$ 1.168.586	\$ -
2016	5,75%		\$ 1.247.699	\$ -
2017	4,09%		\$ 1.319.442	\$ -
2018	3,18%	6 m, 9 d	\$ 1.373.407	\$ 8.652.465
2019	3,80%	14	\$ 1.417.082	\$ 19.839.141
2020	1,61%	14	\$ 1.470.931	\$ 20.593.028
2021	5,62%	14	\$ 1.494.613	\$ 20.924.576
2022	13,12%	9 m, 17 d	\$ 1.578.610	\$ 15.102.034
2023			\$ 1.785.723	\$ -
			TOTAL	\$ 85.111.245

Y toda vez que al señor Heriberto de Jesús Cuartas Muriel, le fue reconocida la pensión de vejez por parte de Colpensiones mediante Resolución SUB267075 del 27 de septiembre de 2022, a partir del 18 de septiembre de 2022, en cuantía de \$1.473.696, es palmario que la UGPP; deberá continuar reconociendo el mayor valor atendiendo al carácter compartido de la prestación, tal y como se dispuso en el mismo artículo 98 convencional, al señalar: *“No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a que se refiere el presente artículo.. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez”*.

Corolario de lo expuesto, deberá también cancelar la UGPP al pretensor, la suma de \$1.414.579, por concepto de mayor valor de la pensión, liquidado entre el 18 de septiembre de 2022 al 30 de julio de 2023, debiendo reconocer a partir del 1° de agosto de la presente anualidad, la suma de \$118.679, por mayor valor, sin

perjuicio de los incrementos anuales que autorice el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta 14 mesadas.

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2022	13,12%	\$ 1.473.696	\$ 1.578.610	\$ 104.914	4 m, 13 d	\$ 465.119
2023		\$ 1.667.045	\$ 1.785.724	\$ 118.679	8	\$ 949.430
TOTAL						\$ 1.414.549

Se advierte que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se adicionará el fallo, en el sentido de autorizar a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP para descontar del retroactivo pensional dispensado los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Finalmente, se encuentra que procede la indexación de la condena impuesta, la cual constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, toda vez que, en países inflacionarios como el nuestro, la moneda pierde su valor adquisitivo, por lo que se confirmará la sentencia consultada en este sentido.

Sobre las costas a cargo de la UGPP

En lo que respecta a la condena en costas impuesta en la primera instancia a cargo de la entidad accionada, se considera que la misma resulta procedente por haber resultado esta vencida en el proceso, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, siendo esta una condena objetiva y por ello no puede exonerarse a la entidad bajo el argumento de haber actuado conforme a los preceptos legales, afirmación que en últimas tampoco resulta de recibo, pues la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

desde la sentencia SL3635 de 2020, ha iterado la vigencia del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo.

De consiguiente, la sentencia de primera instancia será modificada, adicionada y confirmada en los términos indicados. Sin costas en esta instancia por haber alcanzado prosperidad el recurso de apelación interpuesto por la señora Heriberto de Jesús Cuartas Muriel.

Costas en esta instancia a cargo de la UGPP por no haber alcanzado prosperidad el recurso de apelación, inclúyase como agencias en derecho, en favor del actor, la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se MODIFICA y ADICIONA el numeral segundo de la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Heriberto de Jesús Cuartas Muriel contra Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional, en el sentido de indicar que el retroactivo pensional causado entre el 22 de julio de 2018 y el 17 de septiembre de 2022, asciende a la suma de **\$85.111.245**, y el retroactivo generado por concepto de mayor valor de la pensión, liquidado entre el 18 de septiembre de 2022 al 30 de julio de 2023, corresponde la suma de \$1.414.579. A partir del 1° de agosto de la presente anualidad, la accionada deberá continuar reconociendo al demandante la suma de \$118.679, por mayor valor de la mesada pensional, sin perjuicio de los incrementos anuales que autorice el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta 14 mesadas. Finalmente, se

adiciona el citado numeral en el sentido de autorizar a la UGPP, a efectuar de las sumas reconocidas los aportes para el Sistema General de Salud.

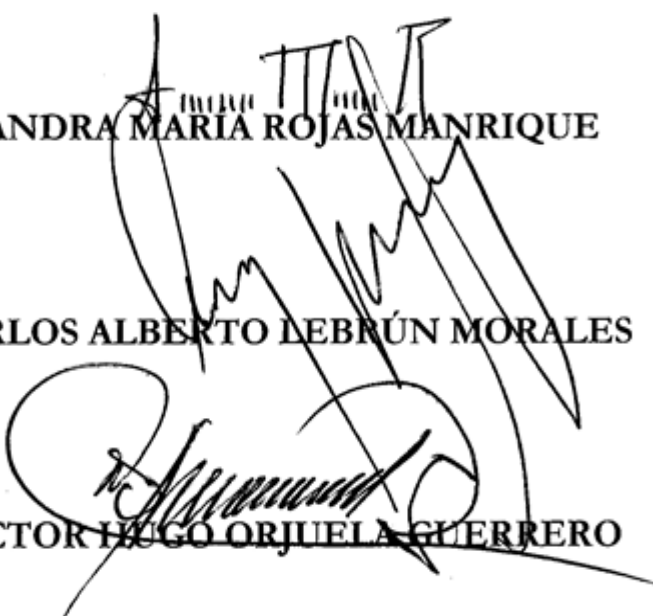
2.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.

3.- **COSTAS** en esta instancia a cargo de la UGPP, inclúyase como agencias en derecho, en favor del actor, la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO